

La inscripción de bienes adquiridos por la mujer casada a título oneroso

La Resolución de la Dirección General de los Registros de 11 de octubre de 1941 vino a suscitar una vez más la antigua cuestión que el art. 1.407 del Código civil plantea en sus aplicaciones prácticas dentro del campo registral. El gran número de resoluciones y sentencias dictadas en relación con este punto, aunque han tenido y tienen siempre una coincidencia en lo fundamental, difieren lo suficiente en cuanto a sus detalles para que sea uno de los que más dudas originen en el desarrollo de la labor del Registrador, sobre todo antes de que un detenido estudio sobre la materia y la experiencia diaria de la profesión nos hagan formar un criterio decidido y claro acerca del mismo.

En teoría no son muchas las dificultades: los arts. 1.401 y 1.407 del Código civil son terminantes. Los bienes del matrimonio se reputan gananciales salvo prueba en contrario; pero al trasladar este precepto a la práctica las dificultades y dudas surgen abundantes, como lo prueba la abundante jurisprudencia en relación con la doctrina legal.

El caso a que se refiere la Resolución que comentamos, y en el que hemos de fijarnos especialmente, es el de una adquisición a título oneroso hecha a nombre de la mujer casada durante el matrimonio. En tal supuesto la jurisprudencia se ha decidido siempre de una manera unánime en el sentido de que los bienes adquiridos de esta forma tienen el carácter de gananciales, no importando que en el título se manifieste que el dinero del precio es de la exclusiva pertenencia de la mujer, siempre que tal alegación no se pruebe cumplidamente. En realidad, en este punto no cabía otro criterio, ya que no es sino la traslación a la práctica del precepto del art. 1.407 del Código civil.

La divergencia surgía en lo que pudiéramos llamar mecánica del Registro, pues al hacer la inscripción, si en el título nada se decía sobre el carácter de los bienes, unos Registradores inscribían simplemente a nombre de la mujer; otros añadían que esa adquisición tenía carácter ganancial; y otros, en fin, inscribían a nombre de la sociedad legal de gananciales. Y en cuanto al caso de que en el título se hiciera por la mujer, o por ésta y el marido, la manifestación de que el precio era de la exclusiva pertenencia de ella, sin probarlo, unos denegaban la inscripción; otros suspendían hasta tanto se probase, y algunos prescindían de aquella manifestación en el acta de inscripción, aunque en el fondo de la misma la relacionasen, como una circunstancia cuyo conocimiento pudiera interesar en su día a los futuros contratantes sobre los bienes.

La Resolución de 11 de octubre de 1941 se limita a establecer la improcedencia de hacer inscripciones a nombre de la sociedad de gananciales toda vez que no es una personalidad distinta de la de los cónyuges, así como a determinar el efecto de aquellas manifestaciones de los interesados que—dice—deben hacerse constar en las inscripciones, pero no prejuzgan en modo alguno la naturaleza ganancial o privativa de los bienes.

Siendo esto así, se comprende que no se ha hecho sino reiterar lo ya resuelto en multitud de ocasiones, y no es explicable que pueda entenderse que con esa doctrina se autoriza el que los bienes con la sola manifestación de los interesados de que son propios de la mujer, adquieran ese carácter en el Registro y en lo sucesivo hayan de ser considerados como tales a todos los efectos, hasta el punto de que sea la mujer y no el marido quien tenga registralmente la facultad de disposición.

Esta parece ser, no obstante, la opinión sustentada en un trabajo publicado en el Suplemento número 442 de la REVISTA CRÍTICA DE DERECHO INMOBILIARIO por mi querido compañero y amigo don Bartolomé Menchén Benítez, así como en el cuaderno de Resoluciones de la Dirección General de los Registros de 1941, en un prólogo firmado por el Sr. Núñez Lagos. Y como no me ha sido posible participar de esa opinión y estimo el punto de un gran interés y trascendencia, me he creído obligado a publicar, aunque con algún retraso no debido a mi voluntad, estas someras consideraciones, sin otro ob-

jeto que llamar la atención sobre el mismo y aspirando, si fuese posible, a contribuir modestamente a su esclarecimiento.

A mi juicio, los bienes inscritos a nombre de la mujer, aunque en la inscripción conste que ella o el marido han manifestado que deben ser considerados privativos, han de seguirse estimando como gananciales para los efectos del Registro; y ello por la simple aplicación del Código civil, que así lo presume salvo prueba en contrario, pues no creo que nadie pueda considerar prueba suficiente la simple alegación de parte interesada. Lo contrario sería reducir a total ineficacia el sistema de nuestra legislación mediante un pre-juicio realizado sin garantía de ninguna clase y con una gran trascendencia práctica, ya que su carácter privativo vendría avalado por una declaración registral con todas sus consecuencias. Creo que ni en la jurisprudencia anterior ni en la Resolución que nos ocupa hay nada que autorice esa interpretación. Antes al contrario: ¿no se dice en ella que las manifestaciones de los interesados hechas constar en la inscripción "no prejuzgan la condición de los bienes dentro de la sociedad conyugal ni al tiempo de disolverse"?

Otra cosa sucede cuando al solicitarse la inscripción a nombre de la mujer se prueba que la adquisición se ha hecho con dinero de su propiedad; entonces, si el Registrador estima suficiente la prueba e inscribe haciendo constar de un modo expreso que no son gananciales, ha calificado, en cuanto se refiere al Registro, la condición de los mismos, y tal calificación, como cualquiera otra de este funcionario, se hace bajo su responsabilidad y ha de surtir su efecto mientras por los organismos competentes no se resuelva otra cosa.

Las razones que en los trabajos a que antes aludía se invocan en contra de la opinión que se acaba de exponer no las estimo en manera alguna convincentes, como voy a tratar de demostrar a continuación. En resumen, son las siguientes:

1.^a Si las circunstancias o datos hechos constar en la inscripción relativas a la simple manifestación de la procedencia del dinero sirven, según la citada Resolución, sólo para atribuir en su día a un grupo patrimonial los bienes adquiridos por la mujer, pero no prejuzgan la condición jurídica de los mismos, el Registrador, en las sucesivas inscripciones, ha de atenerse al titular inscrito, y así habrá de denegar, por ejemplo, la escritura de venta otorgada por el marido.

No estimamos acertado este razonamiento: aquellas circunstancias que constan en la inscripción es cierto que no prejuzgan la condición de los bienes; pero *precisamente por ello* la presunción "juris tantum" de la ley nos obliga a considerarlos gananciales, y de aquí que sólo el marido pueda disponer de los mismos, aunque la inscripción aparezca a nombre de la esposa.

2.^a La equidad y la ética nos dicen que no debe prescindirse de la esposa al disponer de unos bienes que fueron adquiridos a su nombre.

No creemos tampoco que con la opinión que venimos sustentando se lesionen la ética ni la equidad. La demostración de que los bienes son propios de la mujer puede hacerse en cualquier momento; si así no se hace no puede culparse a nadie del perjuicio que pudieran sufrir.

3.^a Si el Registrador puede decidir el carácter ganancial o privativo de los bienes, queda convertido en Juez y en posesión de unas facultades que la ley ni le concede ni regula.

Vuelve a olvidarse aquí que la ley exige prueba para que los bienes no se estimen gananciales en estos casos; si no se aporta, ha de regir aquella presunción legal. Y si el Registrador estima que se ha probado, no hace más que utilizar su facultad calificadora, bajo su responsabilidad y con los efectos que a la misma concede la ley; por otra parte, creo que nadie pueda extrañarse de que este funcionario, dentro del círculo de sus atribuciones, tenga facultades análogas a las judiciales, pues al calificar un título realiza una especie de juicio que afecta tanto al fondo como a la forma del documento, aunque la trascendencia de su resolución no traspase, como es lógico, el ámbito registral, ni impida la resolución judicial que pueda dictarse.

4.^a Con mantener esa doctrina no se evitan las donaciones entre cónyuges, siendo, en cambio, un gran obstáculo para inscribir a nombre de la mujer bienes que en realidad se hayan adquirido con dinero parafernial.

Estamos conformes con que la doctrina que venimos sosteniendo no evita en absoluto las donaciones dentro del matrimonio, ya que caben muy numerosos arbitrios para burlar esa prohibición legal, pero también es cierto que con la opinión que combatimos se dan toda clase de facilidades para esa especie de contratos, y no sólo esto, sino que se facilita también de manera extraordinaria el fraude a los legi-

timos acreedores del marido o de la sociedad conyugal. Y en cuanto al obstáculo que puede suponer para la inscripción como propios de la mujer de los bienes que efectivamente lo sean, no creo que signifique rémora alguna si los interesados que deben conocer, y en la práctica conocen en la inmensa mayoría de los casos la presunción legal en contrario, se cuidan de sus intereses. Y si no lo hacen así, no se puede culpar, a la Ley de lo que ellos no han querido evitar.

5.ª El inscribir con el carácter de propios de la mujer nada perjudica el que en su día se demuestre donde corresponda que la adquisición fué ganancial.

Efectivamente, la inscripción, ya se haga con uno u otro carácter, sabemos que no impide que ante el organismo competente se ventile la cuestión de un modo definitivo. Pero, ¿y hasta que esa demostración tenga lugar? Piénsese que de esta manera el Registro ha quedado cerrado para todo acto de disposición que no provenga de la mujer, y, por tanto, los bienes han quedado también inmunes a cualquier procedimiento preventivo o ejecutivo que se dirija sobre ellos por obligaciones del marido o de la sociedad conyugal, y esto sin contar con que en ese intervalo se han podido crear derechos de terceros que hagan en la práctica ilusoria la efectividad de la resolución que en definitiva pueda dictarse.

Con lo dicho hasta ahora me parece que ha quedado demostrado, ya que no la certeza de mi opinión, al menos el peligro que resulta de la adopción de la contraria. Y este peligro se hace aún mayor teniendo en cuenta que la novedad radical que supondría en nuestro sistema de legislación civil traería consigo una profunda perturbación en nuestra vida jurídica, originada por el infinito número de situaciones creadas al amparo del sistema anterior y a cuya revisión pudieran aspirar los interesados. Conste, pues, que seguiremos interpretando los artículos 1.401 y 1.407 del Código civil en el sentido que pudiera llamarse clásico o tradicional, sin que para ello sea obstáculo la estudiada Resolución que ya hemos visto que, en definitiva, no viene a decir nada esencialmente nuevo, y hasta tanto que nuevas Resoluciones o razonamientos más convincentes vengán a modificar nuestro actual modo de pensar.

FERNANDO DE LAS HERAS MARTÍNEZ,

Registrador de la Propiedad